EXPEDIENTE No.: ****
QUEJOSA: Q1
AGRAVIADO: V1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
13/2015
AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de febrero de 2015

LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, 4º Bis, 4º Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1o., 3o., 7o. fracciones I, II y III, 16 fracción IX, 27 fracción VII, 55, 57, 58 y 64 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como 94, 95, 96, 97 y 100 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número ****, relacionados con la queja interpuesta por la señora Q1, por presuntas transgresiones a derechos humanos en agravio de V1, que son atribuidos a personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo segundo y 51, ambos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y 10 de su reglamento interno. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que ésta dicte las medidas de protección correspondientes, y visto los siguientes:

I. HECHOS

La presente investigación dio inicio con motivo de la queja interpuesta por la señora Q1 en fecha 15 de abril de 2013, mediante la cual hizo del conocimiento hechos que consideró transgredieron derechos humanos de su hijo V1.

Dicha reclamación consistió, entre otras cosas, en que el día 12 de abril de 2013, su hijo V1 circulaba por la calle **** y **** en Los Mochis, Ahome,

Sinaloa, cuando elementos policiacos lo detuvieron para realizarle una revisión, y al llevarla a cabo se percataron de una fotografía del mismo con un arma y pese a la explicación de que dicha arma no era suya, le infirieron golpes para que les dijera dónde se encontraba ésta.

Aunado a lo anterior, se refirió que dichos elementos policiacos irrumpieron en su domicilio buscando la supuesta arma y causando destrozos.

Asimismo, la señora Q1 manifestó que al acudir a Barandilla no le proporcionaron información sobre la situación jurídica de su hijo, así como tampoco le permitieron verlo, que fue hasta el día siguiente en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado que se pudo entrevistar con él, percatándose de que estaba muy golpeado, manifestándole que los elementos policiales que llevaron a cabo su detención fueron quienes le habían inferido tales golpes y que además le adjudicaron droga.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Oficio número **** de fecha 18 de abril de 2013, mediante el cual este organismo estatal solicitó al comandante SP1, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, el informe de ley respecto los hechos expresados en la queja.
2. Oficio número **** de fecha 22 de abril de 2013, recibido el 24 siguiente, por el cual el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, expresó que efectivamente se procedió a la detención del señor V1, por las causas descritas en el parte informativo suscrito por los agentes AR1 y AR2, en el cual no se mencionó que haya sido necesario el uso de la fuerza física durante o después de la detención, únicamente se mencionó que dicha persona se cayó de una bicicleta cuando intentaba darse a la fuga.

Asimismo, expresó que V1 quedó a disposición del Juez Calificador en turno del Tribunal de Barandilla, quien posteriormente lo remitió al agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte.

Dicho informe se hizo acompañar de los documentos que a continuación se detallan: Certificado médico practicado por el médico adscrito al Tribunal de Barandilla de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, del que se advierte las lesiones que a su valoración presentaba el señor V1; copia de parte informativo suscrito por los agentes AR1 y AR2, a bordo de la patrulla ****, quienes a través del mismo manifestaron que siendo alrededor de las 17:00 horas del día 12 de abril de 2013, se encontraban

realizando un recorrido de vigilancia a bordo de la **** en el cuadrante ****, por la calle **** esquina con ****, de la colonia ****, cuando se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino a bordo de una bicicleta con actitud sospechosa, mismo que al observar la presencia de la unidad policial se dio a la fuga por la calle **** rumbo al boulevard ****, pero antes de llegar a este último se cayó de la bicicleta, logrando darle alcance.

También se refiere en dicho parte que al interceptar a la citada persona, se le realizó un registro preventivo encontrándole en la bolsa delantera del lado derecho del pantalón que vestía, una bolsa de polietileno transparente con 20 envoltorios, conteniendo cada uno en su interior una sustancia granulada de color blanco, al parecer de la droga conocida como cristal y que al cuestionarlo sobre los mismos, manifestó que se dedicaba a la venta de droga.

3. Mediante oficios números **** y **** de fechas 23 y 29 de abril de 2013, respectivamente, se solicitó al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, y al agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo los informes de ley correspondientes respecto los hechos motivo de la queja.

4. Oficio número **** de fecha 29 de abril de 2013, mediante el cual el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, informó que V1 ingresó a dicho Centro el día 14 de abril de 2013, a las 12:54 horas.

Al informe de referencia se adjuntó copia certificada de dictamen médico practicado a dicho interno, donde se hizo constar que presentó lesiones dermoepidérmicas abrasivas en fase de cicatrización en tórax, abdomen y múltiples lesiones por quemadura eléctrica en cara interior de muslos y escroto.

5. Oficio número **** de fecha 7 de mayo de 2013, mediante el cual el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte manifestó que efectivamente la persona de nombre V1 fue puesto a disposición de la agencia social a su cargo el día 12 de abril de 2013, a las 21:00 horas, al ser detenido en flagrancia delictiva por los agentes AR1 y AR2 como probable responsable de la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de metanfetamina (cristal), iniciándose la averiguación previa 1.

También refirió que en la citada indagatoria se llevaron a cabo diligencias, entre las cuales destacó certificado médico de fecha 13 de abril de 2013, donde peritos médicos legistas adscritos a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales Zona Norte dictaminaron lesiones al señor V1, concluyendo que presentaba huellas o lesiones recientes producidas por violencia física en su

superficie corporal, las cuales no ponen en peligro la vida y tardan hasta 15 días en sanar.

Asimismo, dijo que dichas lesiones se hicieron consistir en escoriación con costra serohemática de 1 cms. de longitud por 0.3 cms. de ancho localizada en la región frontal derecha y producida por mecanismo de fricción; diversas escoriaciones con costra serohemática en tercio proximal y posterior del antebrazo derecho e izquierdo producido por mecanismo de fricción; tres escoriaciones lineales con costrificación de 3 cms. de longitud cada una localizadas en la parte anterior del abdomen (epigastrio e hipocondrio izquierdo) producidas por mecanismo de fricción; múltiples escoriaciones puntiformes con costrificación localizadas en hemitorax lateral derecho producidas por mecanismo de fricción; múltiples escoriaciones rojizas con costrificación de varias medidas localizadas en tórax posterior derecho e izquierdo y producido por mecanismo de fricción; diversas escoriaciones rojizas puntiformes localizadas en región inguinal parte interna y superior del muslo derecho, producido por mecanismo de fricción, y, dos escoriaciones rojizas con costrificación de 2.5 cms. de longitud cada una localizadas en ambas rodillas y producidas por mecanismo de fricción.

Al oficio de respuesta se adjuntó la siguiente documentación: declaración como indiciado de V1, donde refirió haber sido golpeado por los elementos aprehensores, quienes le dieron toques en la parte alta de la espalda, en los genitales, en las piernas y en el abdomen, así como también expresó haber sido víctima de amenazas con el propósito de que se adjudicara hechos falsos.

En dicha declaración se hizo constar en fe ministerial practicada sobre la integridad física del declarante las siguientes lesiones: escoriación de 1 centímetro de largo por .5 centímetros de ancho localizada en la región frontotemporal derecha; escoriación de aproximadamente 7x3 centímetros localizada en cara posterior del brazo derecho en proceso de cicatrización; escoriación en codo izquierdo de aproximadamente 3x1 centímetro; escoriaciones diversas localizadas en abdomen y costado derecho de arco costal; escoriaciones diversas localizadas en espalda alta; escoriaciones diversas localizadas en cara interna del muslo cerca de la ingle y escoriaciones diversas localizadas en la cara anterior de ambas piernas por debajo de las rodillas.

6. Acta circunstanciada donde se hizo constar la presencia de personal de este organismo estatal en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a efecto de entrevistar al señor V1.

Durante dicha entrevista, el hoy agraviado refirió que ratificaba la queja presentada por la señora Q1, agregando a través de su puño y letra que los policías al momento de su detención lo llevaron a su casa y se metieron sin una

orden de cateo, pidiendo que les entregara un arma que no tenía; asimismo, refirió que su padre también fue objeto de malos tratos, pues los agentes lo empujaban y le apuntaban con los rifles y que al no encontrar el arma le sembraron 20 bolsas de cristal, mismas que desconoce.

7. Acta circunstanciada de fecha 12 de junio de 2013, mediante la cual se hizo constar comparecencia del señor T1, padre del agraviado, quien manifestó que el día de los hechos se encontraba en su domicilio, cuando escuchó patadas en la puerta principal y gritos pidiendo que abrieran, por lo que salió, percatándose de que elementos de la policía municipal traían a su hijo todo ensangrentado, preguntándole por una supuesta arma, manifestándoles que no tenían ningún arma, mientras lo empujaban y entraban.

Asimismo, refirió que al cuestionar a su hijo sobre esa arma, éste le dijo que había tenido que decirles eso ya que no dejaban de golpearlo y en ese momento uno de los agentes le mostró el celular de su hijo donde aparece una fotografía del mismo con un arma, mientras buscaban la arma en cada rincón, causando destrozos en el inmueble.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 12 de abril de 2013, el señor V1, al circular por la calle **** esquina con ****, de la colonia ****, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, fue abordado por los agentes AR1 y AR2, patrulla ****, quienes efectuaron contra éste detención para luego trasladarlo a la policía municipal donde lo estuvieron golpeando hasta lograr que les dijera sobre un arma que supuestamente tenía en su domicilio, la cual no fue ubicada; sin embargo, el señor V1 fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte, por la presunta comisión de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de metanfetamina (cristal).

Asimismo, al ingresar al hoy agraviado a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, se le realizó un examen médico dando parte de las lesiones que presentaba el agraviado en su integridad física para después remitirlo ante el agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte, donde también se le practicó examen médico, resaltando lesiones sobre su corporeidad, mismas que le fueron inferidas por los agentes aprehensores.

Por otra parte, se advirtió que los elementos policiacos que llevaron a cabo la detención de V1, irrumpieron en el domicilio del agraviado buscando la supuesta arma y causando destrozos en el interior de éste y que una vez que se retiraron del domicilio llevándose consigo a V1, acudieron a buscarlo a

Barandilla; sin embargo, les negaron información sobre su situación jurídica y fue hasta el día siguiente en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado que se pudo entrevistar con él, percatándose que estaba muy golpeado, manifestándole que habían sido los elementos policiales que llevaron a cabo su detención quienes le infirieron tales golpes y que además le habían adjudicado droga.

IV. OBSERVACIONES

Analizado que fue el escrito de queja presentado por la señora Q1, se advierte que los motivos de queja consistieron en que su hijo V1 fue detenido el día 12 de abril de 2013, provocándole por parte de los elementos aprehensores, afectación en su superficie corporal, así como imputación de hechos falsos, introducción a su domicilio y daños a propiedad; además de la omisión por parte del personal del Tribunal de Barandilla de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome de proporcionar información respecto de la situación jurídica del detenido.

Respecto de lo anterior, no es a este organismo estatal a quien corresponda determinar si existió o no una imputación de hechos falsos, ya que por tipificarse como delito, es la autoridad jurisdiccional quien se encargará de dilucidar sobre la veracidad de las manifestaciones hechas por el agraviado.

Por otra parte, se aduce que V1 al ser examinado por médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, por los peritos médicos legistas adscritos a la Dirección de Investigación, Criminalística y Servicios Periciales Zona Norte y por el médico adscrito al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, se dictaminó que sobre éste existían lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida tardan más de 15 días en sanar y que fueron provocadas por mecanismo de fricción y electricidad.

Se suman a tales aseveraciones lo manifestado por los CC. Q1 y T1, padres del agraviado, quienes coinciden al expresar que elementos policiales irrumpieron en su domicilio haciéndose acompañar de su hijo V1, quien se encontraba golpeado y ensangrentado, y que ello lo hicieron con el propósito de encontrar el arma que el mismo dijo tener en su domicilio para evitar que lo siguieran golpeando.

Finalmente, se advierte la falta de información por parte de servidores públicos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, toda vez que al acudir la hoy quejosa al Tribunal de Barandilla no le dieron información sobre el detenido, no obstante que por parte de la misma dependencia había sido puesto a disposición del agente del

Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte.

Derivado de lo anterior, serán materia de análisis en la presente resolución la conducta llevada a cabo por servidores públicos, con la cual se generó transgresión a derechos humanos que a continuación se detallan:

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: A la integridad física y seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Tortura

El derecho a la integridad y seguridad personal es la prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.¹

En este sentido, considerando que la queja está enfocada por tortura, lesiones y malos tratos, es preciso señalar el significado del término “tortura”², el cual según el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes emitido por las Naciones Unidas), lo define como todo acto por el cual infrinjan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona que en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Partiendo de los conceptos dados y tomando en consideración todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, se infiere que los elementos exigidos por el último de los conceptos se encuentran reunidos, toda vez que se le infringieron lesiones y sufrimientos graves con el fin de obtener una confesión del hoy víctima.

¹Soberanes Fernández José Luis, “*Derecho a la Seguridad Jurídica*”, Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, Pág.225.

²Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “*Protocolo de Estambul*”, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Serie de Capacitación Profesional N°8, Rev.1, Nueva York y Ginebra 2004, Pág 17.

Circunstancia que se llevó a cabo derivado de la fotografía que el hoy agraviado traía en su celular, por lo que lo llevaron consigo a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, tal y como lo expresó el agraviado en su declaración ante el Ministerio Público, introduciéndolo a un cuarto, le taparon la cara con la camiseta y encima de la camiseta le pusieron una venda y lo comenzaron a golpear.

Agresión que se realizó sobre la superficie corporal del hoy agraviado, con un objetivo determinado, obtener la confesión de que la arma de fuego que aparecía en las fotografías del celular era de su propiedad y a su vez informara sobre el lugar donde ésta se encontraba.

Sin embargo, ante la dificultad de lograr su objetivo los elementos aprehensores le dieron toques en la parte alta de la espalda, en los genitales, en las piernas y en el abdomen.

Versión que desde luego fue negada por los elementos policiales, quienes manejaron una versión distinta respecto la detención del hoy agraviado; sin embargo, de las evidencias existentes en el expediente, como son, no sólo la queja presentada por la señora Q1, sino también el dicho del señor T1 se expresó que elementos policiales irrumpieron en su domicilio haciéndose acompañar de su hijo V1, quien se encontraba golpeado y ensangrentado, y que ello lo hicieron con el propósito de encontrar la arma con la que aparecía en una fotografía que se encontraba en su celular y que el mismo dijo tener en su domicilio para evitar que lo siguieran golpeando.

Fue producto de la violencia que ejercieron sobre el hoy agraviado, que los elementos policiales lograron una supuesta confesión respecto del lugar donde se encontraba un arma de fuego que portaba en su fotografía, por lo que a efecto de localizar y asegurar ésta, lo trasladaron a su domicilio particular ubicado en calle ****, fraccionamiento ****, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, circunstancia de la que no hay duda, pues no sólo está el dicho de la quejosa, sino también en lo manifestado por el padre del agraviado, el señor T1, donde fue imposible la localización de ésta, debido a que la versión dada por el hoy agraviado fue sólo para evitar que le siguieran infiriendo lesiones en su superficie corporal.

Posterior a su detención, el agraviado fue trasladado a las instalaciones que ocupa la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte, no sin antes contar con certificado médico expedido por el médico adscrito al Tribunal de Barandilla de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, que arrojó como resultado distintas lesiones en la corporeidad del hoy agraviado.

No pasa desapercibido para este organismo estatal que la valoración médica en mención, según informe rendido por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome se realizó al ingresar al Tribunal de Barandilla, esto es, a las 19:20 horas del día 12 de abril de 2013; sin embargo, su detención se llevó a cabo a las 17:00 horas, por lo que es de advertirse una demora en la puesta a disposición, pues la remisión debió realizarse inmediatamente después de su detención, es decir, considerando únicamente el tiempo necesario para su traslado.

Al respecto, el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala, entre otras cosas, “que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido, no existiendo motivos razonables que imposibilitaron la misma, lo que implica que los agentes de policía debieron únicamente mantener en su poder a V1 por el tiempo estrictamente necesario para la realización de su traslado ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, según fe ministerial de la integridad física del señor V1, se acredita que el día en que rindió su declaración como indiciado, el hoy agraviado presentaba las siguientes lesiones: escoriación de 1 centímetro de largo por .5 centímetros de ancho localizada en la región frontotemporal derecha; escoriación de aproximadamente 7x3 centímetros localizada en cara posterior de brazo derecho en proceso de cicatrización; escoriación en codo izquierdo de aproximadamente 3x1 centímetro; escoriaciones diversas localizadas en abdomen y costado derecho de arco costal; escoriaciones diversas localizadas en espalda alta; escoriaciones diversas localizadas en cara interna del muslo cerca de la ingle y escoriaciones diversas localizadas en la cara anterior de ambas piernas por debajo de las rodillas, siendo todas las lesiones que se le aprecian a simple vista, refiriendo el declarante dolor a la palpación en cráneo en la parte posterior.

Sin lugar a dudas dichas lesiones fueron inferidas por los agentes aprehensores, derivado de los malos tratos ejercidos sobre el hoy agraviado, pues de las copias certificadas que adjuntó a su informe el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, se advierte que siendo alrededor de las 17:00 horas del día 12 de abril de 2013, los agentes AR1 y AR2, se encontraban realizando un recorrido de vigilancia a bordo de la **** en el cuadrante ****, por la calle **** esquina con **** de la colonia ****, se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino a bordo de una bicicleta con

actitud sospechosa, mismo que al observar la presencia de la unidad policial se dio a la fuga por la calle **** rumbo al boulevard ****, pero antes de llegar a este último se cayó de la bicicleta logrando darle alcance.

El dicho de los agentes AR1 y AR2 resulta poco creíble, dado que las lesiones que pudieron ocasionársele con la caída de la bicicleta no corresponden a las que presentaba, aunado a ello, en ningún momento los agentes aprehensores mencionaron que el agraviado pusiera resistencia a su detención y que con motivo de ello se hubiere lesionado.

Por otra parte, se advierte del certificado médico expedido por el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, que las lesiones encontradas en tórax, abdomen, muslos y escroto fueron provocadas por electricidad, lo cual descarta la posibilidad de que dichas lesiones fuesen autoinfligidas.

No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos que lo manifestado por los agentes aprehensores en el parte informativo carece de veracidad, toda vez que se contrapone a lo manifestado por el directamente agraviado en su declaración como indiciado, la cual cabe mencionar fue inmediatamente después de su detención y en que refirió que el día viernes 12 de abril de 2013, aproximadamente a las 16:00 horas, cuando circulaba por la calle **** poco antes de llegar al boulevard ****, con dirección a su domicilio lo interceptó una patrulla de la policía municipal a efecto de realizar una revisión de rutina y que al revisar su celular encontraron una fotografía en la que el hoy agraviado aparecía con un arma.

Asimismo, expresó que con la finalidad de que les entregara dicha arma, los elementos policiacos comenzaron a golpearlo y pese a decirles que no la tenía lo seguían golpeando y le ponían toques en la parte alta de la espalda, en los genitales, en las piernas y en el abdomen, lesiones que concuerdan con lo evidenciado en los dictámenes médicos mencionados con anterioridad y que nos hacen presumir que efectivamente tenían un objetivo, el cual no podría ser el sometimiento del presunto responsable de la comisión de un delito, esto debido a que en el parte informativo no se menciona que el señor V1 haya puesto resistencia al momento de su detención; por otra parte, se presume que dichas lesiones fueron inferidas en lugar cerrado, obedeciendo al mecanismo y zonas en las que se encuentran.

En virtud de todo lo narrado en los párrafos que anteceden, queda acreditado que los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome llevaron a cabo una conducta de tortura en contra del señor V1, al tenerlo privado de la libertad y finalmente ponerlo a disposición por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de metanfetamina (cristal).

Con respecto a los datos que conforman el expediente, tenemos que la versión de los hechos del quejoso es congruente en tiempo y forma con las lesiones que presenta, incluyendo su localización.

Con lo anterior se tiene por acreditado una violación a la integridad y seguridad personal del agraviado, consistente en la tortura a la cual fue sometido, lo cual contraviene con lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la represión, al maltrato en la aprehensión y a la prohibición de todo trato cruel, inhumano y degradante.

También contravinieron con lo estipulado en diferentes ordenamientos internacionales, tales como:

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otro Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes:

“Artículo 1

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante.”

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:

“Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura:

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando con ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Artículo 5. Derecho a la integridad personal.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.

Toda persona privada de la libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...

.....

Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal...”

.....

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Asimismo, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome transgredieron diversas disposiciones de carácter federal, dentro de las que destacan el Código Penal Federal, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen que los servidores públicos deben abstenerse en el ejercicio de sus funciones, de obligar al inculcado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura aun cuando se trate de una orden superior o argumenten circunstancias especiales, ya que su actuar debe regirse por los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece en sus artículos 2 y 3, que en todo momento deberán

cumplir con los deberes que la ley les impone, respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos de todas las personas, haciendo uso de la fuerza sólo cuando se estime estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Además de la legislación mencionada en los párrafos precedentes, existen otras que regulan el proceder de los elementos preventivos municipales y cuya inobservancia lógicamente trae aparejada una sanción con motivo de la deficiencia, ya sea por omisión de su actuación o por el uso excesivo de sus atribuciones.

Tal es el caso de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que en su artículo 31, fracción V, estipula que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como, amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, situación de la que fueron omisos los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome involucrados en la presente causa.

Asimismo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa establece que cada municipio atenderá el servicio de seguridad pública y tránsito, velando por la seguridad y el orden público, previniendo la comisión de delitos y protegiendo a las personas, a sus propiedades y derechos; disposición que también aparece en el Reglamento General para la Prestación de la Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome.

Lo anterior, se robustece con la siguiente tesis jurisprudencial:

“[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 535

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN.

El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente

después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.”

No omitimos señalar que en nuestra Constitución Política local, se han reconocido una serie de derechos humanos con los que nuestro Estado cumple la labor tan importante de armonización con los compromisos contraídos por la Federación ante diversas organizaciones internacionales y normas del mismo ámbito; en ese sentido, el derecho a la integridad física y seguridad personal es un derecho reconocido ampliamente, como ya se expuso con anterioridad.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la seguridad jurídica

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público

El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio.³

Partiendo de esta premisa y del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre el conjunto de evidencias que integran el expediente que nos ocupa, al cual corresponde el número ****, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos muestra la violación a derechos humanos de los que ha sido objeto V1, como es, a la seguridad jurídica, consistente en especie en la indebida prestación del servicio público.

Con relación a las lesiones que presenta el señor V1, la señora Q1 refirió en su escrito de queja presentado a personal de este organismo el día 15 de abril de 2013, que los policías municipales que llevaron a cabo la detención de su hijo lo golpearon y después este último, mediante su declaración como indiciado de fecha 13 de abril de 2013 manifestó que las lesiones fueron con el propósito de que les entregara una pistola con la que aparecía en una fotografía, misma que en un inicio les indicó que no era de su propiedad, pero los agentes municipales continuaban golpeándolo y le ponían toques en la parte alta de la espalda, en los genitales, en las piernas y en el abdomen, por lo que decidió decirles que dicha arma la tenía debajo del colchón de su cama, con el propósito de que cedieran los golpes y lo llevaran a su casa para que su familia se percatara de lo que estaba sucediendo.

Tales manifestaciones coinciden con las lesiones encontradas por el médico adscrito al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, quien determinó que las lesiones encontradas en

³Idem. Nota 1, Pág. 1.

tórax, abdomen, muslos y escroto fueron provocadas por electricidad, haciendo consistente la versión del hoy agraviado.

Esa presunción se robustece con el dicho del señor T1 al señalar ante personal de esta Comisión Estatal que el 12 de abril de 2013, él se encontraba en la sala de su domicilio viendo televisión cuando escuchó patadas en la puerta principal de su vivienda, gritándole que abriera la puerta y cuando salió se percató de la presencia de policías municipales encapuchados que traían a su hijo ensangrentado y quejándose por dolor en diferentes partes del cuerpo, mismos que se introdujeron a su domicilio empujándolo contra la pared y preguntándole por una supuesta arma, la cual les señaló no tener.

Posteriormente, al no encontrar dicha arma amenazaron de nuevo a su hijo V1 diciéndole que lo iban a consignar, procediendo a retirarse llevándose consigo al mismo.

Al retirarse los elementos policiacos, la hoy quejosa se trasladó a la Barandilla de policía municipal, sin que le dieran razón alguna del hoy agraviado, fue hasta el día sábado 13 de febrero de 2013 que se enteró que su hijo V1 se encontraba en los separos de la Policía Ministerial del Estado a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, información que debió ser proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, toda vez que el señor V1 fue puesto a disposición por agentes de dicha corporación policial ante la representación social mencionada, siendo las 21:00 horas del día 12 de abril de 2013, esto es, una hora antes de que la hoy quejosa requiriera información sobre el mismo.

Del análisis efectuado a las constancias anteriormente señaladas, es posible advertir que la investigación realizada por este organismo arrojó elementos suficientes que acreditan que el señor V1 fue objeto de agresiones físicas por parte de los CC. AR1 y AR2, agentes aprehensores que llevaron a cabo su detención, adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, toda vez que el certificado médico expedido por el médico adscrito al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, determinó que las lesiones encontradas en diferentes partes del cuerpo al C. V1 fueron provocadas por electricidad, lo cual descarta la posibilidad de que dichas lesiones fuesen auto infligidas o bien ocasionadas de manera accidental por caída de bicicleta.

Dichas agresiones quebrantan los principios de respeto y honradez hacia los derechos humanos que todo elemento de seguridad pública debe observar de acuerdo con el artículo 6° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece: “Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley”.

Asimismo, los funcionarios públicos municipales incumplieron con lo establecido por el artículo 1° del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, pues dicha normatividad establece que en el desempeño de sus tareas respetarán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, pudiendo hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, dando plena protección de la salud de las personas bajo su custodia.

Los elementos policiacos al llevar a cabo la detención del hoy agraviado, debieron en todo momento respetar esta disposición, y si bien es cierto que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden utilizar la fuerza cuando se considere necesario, también es cierto que ésta debe ser proporcional y razonablemente necesaria.

En el caso que nos ocupa, del parte informativo no se advierte que el agraviado haya puesto resistencia al momento que los agentes de la policía municipal le dieron alcance y lo detuvieron, por lo que se puede inferir que hicieron uso de la fuerza sin justificación, resultando preocupante para este organismo estatal que elementos policiales responsables de velar por la seguridad pública, continúen cometiendo actos arbitrarios en contra de las personas.

Por otro lado, se cuentan con elementos suficientes que permiten acreditar que los agentes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome no respetaron los lineamientos establecidos por el artículo 21, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Acciones estas con las que se verifica el hecho violatorio de la prestación indebida del servicio público al no acatarse la norma y no sujetar la conducta de los agentes aprehensores a la misma.

Al respecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

En esa tesitura, los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome quebrantaron lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, ya que todo servidor público tiene la obligación de cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; así como de abstenerse de todo acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

Con lo anterior, no hay duda que los señalados como transgresores de derechos humanos, tenían y a la fecha tienen el carácter de servidores públicos en el Gobierno Municipal, por lo que les asiste la obligación de guiar su conducta con estricto apego a la legalidad, lo cual no hicieron, transgrediendo así tanto legislación nacional e internacional, por lo que las conductas atribuidas a los mismos pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al órgano de control interno de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome inicie procedimiento administrativo en contra de los agentes AR1 y AR2, quienes en fecha 12 de abril de 2013 se encontraban adscritos a la *****, patrulla *****, respecto los actos arbitrarios que se les atribuyen en el apartado de observaciones de la presente resolución y de ser procedente se impongan las sanciones administrativas correspondientes a los agentes señalados como responsables.

SEGUNDA. Dé vista al agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo Zona Norte, para que se ponga de su conocimiento los hechos considerados a

juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como probablemente constitutivos del delito de tortura, según lo establecido por el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

TERCERA. Se gire instrucción al citado grupo policial así como al resto de los elementos de la corporación policial en Ahome, Sinaloa, a efecto de que se evite incurrir en repeticiones respecto los hechos que motivaron la presente resolución y realicen su actuar con estricto apego a legalidad y bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos de toda persona en el Estado de Sinaloa.

CUARTA. Se giren instrucciones debidas a efecto de que elementos policiales y personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome reciban la capacitación necesaria y adecuada en materia de derechos humanos y legalidad.

QUINTA. Se gire la instrucción correspondiente a efecto de que elementos policiales que dependan de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, al momento de llevar a cabo una detención, lo hagan de conformidad con el artículo 54, fracción IV del Reglamento General para la prestación de la Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome y demás ordenamientos legales que concurren sobre este tópico.

VI. NOTIFICACION Y APERCIBIMIENTO

La presente recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Arturo Duarte García, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, la presente Recomendación, la cual quedó registrada en los archivos de esta Comisión bajo el número 13/2015, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifiesten a esta Comisión si aceptan la presente Recomendación, solicitándoseles expresamente que en caso negativo, motiven

y fundamenten debidamente la no aceptación; esto es, que expongan una a una sus contra argumentaciones de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° Constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando la autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a la señora Q1, en su calidad de quejosa, la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO